

JUZGADO SETENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL

(Transformado transitoriamente en el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples)

Bogotá D.C., nueve de octubre de dos mil veinte.

RADICACIÓN	: 2017-00389
PROCESO	: EJECUTIVO
DEMANDANTE	: PLASTIEMPAQUES BH S.A.
DEMANDADO	: NÉSTOR RICARDO PINTOR PENAGOS
ASUNTO	: RECURSO DE REPOSICIÓN

Luego de lograr el acceso al expediente, previo su escaneo y el de muchos de los múltiples a cargo de este Juzgado, uno a la vez con los escasos medios que se disponen, debido a la pandemia que actualmente padece esta ciudad en particular, ocasionada por el COVID-19, el Despacho resuelve sobre los recursos de reposición y de apelación interpuestos por la parte ejecutante contra el auto mediante el cual no se tuvieron en cuenta las últimas gestiones de notificación efectuadas por aquél extremo del litigio.

FUNDAMENTOS DEL AUTO Y LA IMPUGNACIÓN:

Para decidir en tal sentido, se señaló que en los últimos citatorio y aviso allegados se indicó la denominación de Juzgado Setenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá con la que anteriormente se denominaba este Despacho, y no con la denominación actual de Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples que le impuso el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de la transformación que en tal sentido dispuso esa Corporación mediante el Acuerdo PCSAJA18-11127 de 12 de octubre de 2018, a más de que en el aludido citatorio no se indicó el nombre completo del acá demandado.

A través de los recursos que acá se resuelven, la parte actora mostró su inconformidad, por intermedio de su apoderado judicial, quien sobre lo expuesto y decidido en el auto impugnado manifestó: “cómoasí, (sic) si este

despacho siempre lo he conocido como, el 79 civil municipal y ahora sale con esas”, según dijo, cuando este Despacho siempre se ha identificado con esa denominación, “y NO como juzgado transitorio 61 de pequeñas causas”, tanto “en su plaqueta”, como “al radicar memoriales queda plasmado juzgado 79 y mas aun en los sellos de notificaciones, y de estados figura el juzgado 79 civil municipal, y aun más el mandamiento de pago a notificar al demandado fue proferido por el juzgado 79 civil municipal y NO POR EL JUZGADO 61 de pequeñas causas”, y de esa forma “el juzgado 79 sigue profiriendo sus providencias como los sellos lo manifiestan”.

Por las anteriores manifestaciones que estimó *“más que JUSTIFICADAS”*, el recurrente solicitó la revocatoria del auto fustigado, para que, en su lugar, se tenga *“por notificado al demandado”* y, en consecuencia, *“se siga el trámite del proceso sin más demoras y dilaciones procediéndose a seguir adelante la ejecución”*, pues, añadió que *“esta parte ha efectuado cuatro citaciones; dos veces del art. 291 y dos veces del art. 292 tal como figura en el plenario”*, y *“el demandado presentó un escrito que radicó el 14 de enero del 2019 y manifestó darse por enterado de la demanda la que contestó y presentó excepciones foliatura”*, siendo denegados esos actos de notificación, entre otras cosas, *“porque la dirección del juzgado estaba errada”*, pese a que *“la había tomado del cartel del despacho”*.

SE CONSIDERA:

Conforme lo prescribe el artículo 29 de la Constitución Política, *“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”*, lo cual significa que en los procesos judiciales debe observarse la plenitud de las formas previstas en la ley para cada clase de procedimientos, so pena de que se incurra en el desconocimiento del derecho al debido proceso y de las garantías que él comprende, entre ellas, el derecho de defensa.

En desarrollo del referido postulado constitucional, el legislador ha establecido unos precisos requisitos que deben cumplirse en aras de no malograr el derecho de defensa de las partes y estas puedan encauzar debidamente su gestión defensiva.

De ahí que el artículo 290 del Código General del Proceso preceptúe, en su numeral 1º, que *“Deberán hacerse personalmente”, entre otros, “Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo”.*

Para la *“práctica de la notificación personal”*, el artículo 291 del citado código establece, de manera general, que *“La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que le informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino”, o “diez (10) días” siguientes a esa data, “Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado”.*

De manera que *“Si la persona por notificar comparece al juzgado”, allí se efectuará su notificación personal, en los términos de la última preceptiva memorada, colocándole en su “conocimiento la providencia previa su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se extenderá acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquel y el empleado que haga la notificación”.*

En el caso contrario, esto es, *“Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada”, la norma en cita prevé otra forma subsidiaria de notificación, consistente en que “el interesado procederá a practicar la notificación por aviso”.*

En tal evento, es decir, *“Cuando no se pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se debe realizar personalmente”, el artículo 292 del Código General del Proceso dispone que la notificación de tales providencias “se hará por medio*

de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino" (se resalta).

Los autos enseñan que durante el trámite del presente asunto, este Juzgado inicialmente funcionó en la "Calle 19 No. 13-A-12 PISO 9° Uconal" de Bogotá, por lo menos hasta la fecha en que fue librado el oficio de embargo 1207 de 7 de abril de 2017 (fl. 94 Cd. 2), y luego aparece trasladado a la "CALLE 12 9-55, piso 4°, Interior 1, Complejo Kaysser" también de esta ciudad, por disposición del Consejo Superior de la Judicatura, claro está.

Así mismo, en el plenario consta que este Despacho inicialmente se denominó como el "Juzgado Setenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá", hasta antes del 12 de octubre de 2018, cuando fue "Transformado transitoriamente en el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples", por decisión que en tal sentido adoptó el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSAJA18-11127 de la misma data, como así se ha indicado claramente en el cuaderno principal de este proceso, a partir del auto de 24 de enero de 2019 (fl. 43 Cd. 1), y en todos y cada uno de los autos posteriormente proferidos hasta la fecha, incluido el proveído que ahora es objeto de impugnación.

De acuerdo con esas particulares circunstancias presentadas en este asunto, resulta evidente que para colmar debidamente las exigencias de los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso y, con ello, garantizar al acá demandado su derecho fundamental al debido proceso y de defensa, en los citatorios y avisos que se le enviasen, el requisito de la indicación de "el juzgado que conoce del proceso" solamente se satisface, en este preciso caso, en la medida en que el respectivo citatorio y aviso se gestionen con la clara indicación de la denominación de este Juzgado y de su dirección o ubicación vigentes para cuando se surtió todo el trámite previsto para esas formas de citación y notificación, respectivamente; exigencias que lejos de traducir un

criterio meramente formalista, garantizan eficazmente el derecho a la defensa y de contradicción.

De ahí que no es de recibo lo argüido por el recurrente, en el sentido de que este Despacho *“ahora sale con esas”*, cuando siempre se ha identificado con esa denominación, *“y NO como juzgado transitorio 61 de pequeñas causas”*.

Menos aún, cuando aquél es perfectamente conocedor tanto del traslado de dirección o de ubicación de este Juzgado, como de su cambio de denominación, por lo menos, a partir del oficio de embargo 1207 librado el 7 de abril de 2017 (fl. 94 Cd. 2), y desde el auto de 24 de enero de 2019 (fl. 43 Cd. 1), respectivamente, pues, ha actuado desde el inicio de este litigio y adicionalmente se pronunció sobre aquellos actos procesales y los posteriores emitidos con la misma información.

Pese a ello, a través de una empresa de correos, la parte actora remitió una *“CITACION APARA NOTIFICACION PERSONAL ART. 291 C.G.P.”* a la última dirección suministrada *“Diagonal 45D N° 19-62”* (fl. 53 Cd. 1), y posteriormente envió a esa misma dirección una *“CITACION PARA NOTIFICACIÓN POR AVISO ART. 292 C.G.P.”* (fl. 71 lb.), sin el cumplimiento de la exigencia puesta de presente.

Ciertamente, examinados los aludidos documentos, se advierte que los mismos no cumplen a cabalidad con el requisito de la indicación de *“el juzgado que conoce del proceso”*, pues, como tal se mencionó el **“JUZGADO 79 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ”**, cuando para las datas en las que fueron remitidos hace mucho que este Despacho ya había sido *“Transformado transitoriamente en el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples”*, a más de que en el aludido citatorio no se indicó el nombre correcto y completo del acá demandado, ya que se le dirigió a *“Nestor pintor penagos”*, cuando el nombre de aquel es Néstor Ricardo Pintor Penagos, como así se indicó en la demanda acá incoada y en sus anexos.

Lo expuesto es suficiente para mantener incólume el auto ahora impugnado, por encontrarse ajustado a derecho, pues, resulta evidente que no se cumplen los requisitos legales para la notificación del acá demandado por aviso, con base en la referida prueba aportada.

Empero, adicionalmente se advierte que tampoco pueden llevar a la revocatoria del citado proveído, los otros motivos ahora invocados nuevamente por el inconforme, en el sentido de que *“esta parte ha efectuado cuatro citaciones; dos veces del art. 291 y dos veces del art. 292 tal como figura en el plenario”*, y, a su vez, *“el demandado presentó un escrito que radicó el 14 de enero del 2019 y manifestó darse por enterado de la demanda la que contestó y presentó excepciones foliatura (sic)”*.

En primer lugar, porque sobre esos intentos de notificación ya se pronunció el Despacho, no teniéndolos en cuenta por carecer de los requisitos legales para con base en los mismos considerar notificado al acá demandado, por las razones legales expuestas en los autos mediante los cuales se decidió en tal sentido, los cuales se encuentran ejecutoriados, debido a que esas decisiones no fueron impugnadas oportunamente, y, en consecuencia, los argumentos ahora esgrimidos por tales motivos resultan extemporáneos.

En segundo término, por cuanto que de todas maneras esas gestiones tampoco satisfacen las exigencias legales para con base en las mismas poder tener por notificado al acá demandado.

Basta con examinar el citatorio y aviso que fueron diligenciados en septiembre de 2019 (fls. 55 y 60 Cd. 1) para descubrir que en los mismos ni siquiera se indicó la antigua dirección en donde se situaba este Juzgado (*“Calle 19 No. 13-A-12 PISO 9° Uconal”* de Bogotá), ni a la que posteriormente fue trasladado (*“CALLE 12 9-55, piso 4°, Interior 1, Complejo Kaysser”* también de esta ciudad), sino otra muy diferente (*“Calle 11 9-24”*), la cual, en todo caso, aparece tachada y añadida a mano la dirección actual en el aviso, el cual, además, no se indicó la fecha de su elaboración, y no se aportó la constancia del envío del mandamiento de pago a notificar en este asunto, como así se puso de presente

en el auto de 21 de noviembre de 2019, mediante el cual se denegaron las referidas gestiones de notificación adelantadas por la parte ejecutante (fl. 65).

Además, tampoco puede considerarse notificado al demandado con base en el conocimiento que él tenga de las medidas cautelares decretadas en su contra o con la *"intención"* que aquél supuestamente le manifestó al abogado de la parte ejecutante de *"llegar a un acuerdo de pago"*, no sólo porque esas circunstancias no se encuentran demostradas, sino por cuanto de todas maneras supuestos semejantes, como los invocados por el impugnante, no se encuentran previstos por el legislador como formas de notificación al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago.

Y aunque una de las formas alternativas de notificación es la conducta concluyente que asuma el demandado, lo cierto es que en este asunto no se cumplen los presupuestos establecidos taxativamente para ello en el artículo 301 del Código General del Proceso, tal cual se señaló por medio de los autos de 24 de enero (fl. 43 Cd. 1) de 1° de abril (fl. 45 lb.), y de 10 de junio de 2019 (fl. 47 lb.), sin reparo alguno de la parte ejecutante.

Obsérvese que en el expediente no obra un poder conferido por aquél, y el escrito que en el plenario aparentemente milita como suyo, no manifestó conocer la providencia a notificar, ni la mencionó, a más de que no se tiene la plena certeza de que el ejecutado efectivamente conozca de todas y cada una de las obligaciones que acá se le cobran, ni el mandamiento de pago librado por las mismas, pues, aunque allí se dijo contestar los hechos expuestos en la demanda incoada en este asunto, no mencionó tales obligación, las cuales tampoco se especificaron en los supuestos fácticos del libelo demandatorio.

En esas condiciones, es claro que si no se ha logrado la notificación del demandado en este asunto, ello se debe a que las gestiones efectuadas por la parte interesada con tal propósito, no cumplen los requisitos legales, y no porque este Juzgado esté *"tratando de obstaculizar"* o de *"dilatar y entorpecer"* el trámite del aludido acto de enteramiento, como irrespetuosamente

lo adujo el apoderado judicial de la parte actora, pues, la actuación de este Despacho se ha limitado a velar por el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para el adecuado trámite para ambas partes del proceso en general, y para la debida notificación de la parte demandada, en particular, con el fin de no vulnerarle su derecho fundamental a la defensa, y adicionalmente evitar que se incurra en la nulidad del proceso, lo cual no sólo beneficia al ejecutado sino también a la parte ejecutante, quienes bien pueden expresar su inconformidad frente a las decisiones que se profieran, mediante los recursos procedentes, siempre que lo hagan de manera respetuosa sin emplear calificativos irrespetuosos o deshonrosos, sino exponiendo los argumentos jurídicos pertinentes que desde luego no contradigan la realidad procesal ni la correcta interpretación de las normas.

Además, ha de tenerse en cuenta que las razones expuestas en las respectivas providencias, para no tener en cuenta las gestiones adelantadas por el actor en orden a notificar el auto de apremio, no son un mero capricho de este Despacho, en la medida en que se fundamentaron en la realidad que revelan los autos y en la aplicación de normas procesales de orden público, así como en principios y normas de rango constitucional y, por ende, de obligatorio cumplimiento.

Así las cosas, se mantendrá incólume el proveído impugnado por cuanto que no se advierte que el mismo sea contrario a derecho, en la medida en que la realidad procesal revela que no se cumplen a cabalidad las exigencias legales para tener por notificado al acá demandado y, por ende, tampoco se cumplen los requisitos legales para ordenar seguir adelante con la ejecución, y en el evento en el que se profiriese una decisión en tal sentido, como lo pretende el impugnante, con ello se incurriría en la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso.

Además, se denegará el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, por improcedente, no sólo porque el auto cuestionado no aparece enlistado dentro de las providencias susceptibles de la alzada por el estatuto

procesal, sino por cuanto de todas maneras el presente asunto es de mínima cuantía y, por ende, de única instancia.

Por último, se rechazan enfáticamente las temerarias acusaciones de estar *“tratando de obstaculizar”* o de *“dilatar y entorpecer”* el trámite, endilgadas por el abogado de la parte actora, así como la insinuación efectuada por éste en el sentido de que *“pareciera que estuviera actuando en calidad de la pasiva”*, como quiera que ello no corresponde al actuar del suscrito Juez en este litigio, ni en alguno de los demás asuntos a mi cargo, y, en todo caso, además de resultar contraevidentes frente a la realidad procesal y las respectivas normas, van en desmedro de la honorabilidad y buen nombre de este Despacho y su gestión judicial.

En consecuencia, adicionalmente se requerirá al apoderado judicial de la parte demandante para que se retracte de las referidas imputaciones deshonrosas, y en lo sucesivo se abstenga de emplear señalamientos semejantes, so pena de adoptar las medidas correctivas del caso, como devolverle los escritos irrespetuosos que presente, sancionarlo con arresto inmutable hasta por cinco (5) días, entre otras.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Setenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: Mantener incólume el auto impugnado, de conformidad con las anteriores motivaciones.

SEGUNDO: Denegar el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, por improcedente.

TERCERO: Rechazar enfáticamente las temerarias acusaciones de estar *“tratando de obstaculizar”* o de *“dilatar y entorpecer”* el trámite, endilgadas a este Despacho por el abogado de la parte actora, así como la insinuación efectuada por éste en el sentido de que *“pareciera que estuviera actuando en calidad de la pasiva”*.

CUARTO: Requerir al abogado JULIO ANTONIO MURILLO GÓMEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 79.125.617 de Bogotá y la tarjeta profesional 73.775 del C.S. de la J., para que en forma inmediata se retracte de las referidas imputaciones deshonorables e irrespetuosas, y demás empleadas en tal sentido en el escrito de reposición que acá se decide, y en lo sucesivo se abstenga de emplear señalamientos semejantes, so pena de adoptar las medidas correctivas del caso.

Notifíquese,

FABIÁN BUITRAGO PÉREZ
JUEZ

JUZGADO SETENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL
Bogotá, D.C

NOTIFICACIÓN POR ESTADO: La providencia anterior es notificada mediante anotación por ESTADO No 074 hoy 13 de octubre de 2020. (C.G.P., art. 295).

ANDRES DAVID BULLA AYALA
Secretario